

Carta de Caracas. La democracia en vilo

Gustavo Guerrero

No me cuento entre los venezolanos que hoy consideran que el fracaso de Hugo Chávez representa, para nuestro país, algo así como una gran ocasión perdida. Sigo pensando que aquel 56,2% de los votos que le llevó por primera vez a la presidencia en diciembre de 1998 no fue el resultado de una luminosa suma de esperanzas sino el signo oscuro de una desesperada regresión. Y es que había que olvidar mucho de nuestra historia –y mucho de la historia de América Latina– para creer que un teniente coronel sedicioso, autoritario e impulsivo podía convertirse, a la vuelta de unos años, en un demócrata ejemplar y en un buen gobernante. Chávez no ha sido, previsiblemente, ni lo uno ni lo otro. Fiel a la tradición que es la suya, se ha comportado como un caudillo populista para quien la democracia sólo es una forma de tomar el poder y no una manera de ejercerlo. Al principio según el cual la legitimidad que se obtiene en las urnas debe reconquistarse con cada acto de gobierno, nuestro presidente ha opuesto desde un comienzo una interpretación de sus triunfos electorales como patentes de corso que todo lo autorizan y le eximen de cualquier tipo de control. Alguien comentó que, como buen militar, probablemente imaginó que llegar a ser presidente era como llegar a ser comandante general. Lo cierto es que hasta ahora no ha dado muestras de haber entendido que fue elegido democráticamente para que gobernara democráticamente, es decir, creando consensos, negociando diferencias y respetando a las minorías. La deriva dictatorial de su régimen procede en buena medida de esta ausencia de una actitud auténticamente democrática que no sólo se ha hecho flagrante en su manera de desatender los llamados al diálogo sino también –y es mucho más grave– en la voluntad hegemónica que traduce sus repetidos intentos por poner bajo la férula del ejecutivo a las principales instituciones del Estado. Al cabo de seis años de chavismo, los ataques contra los jueces y el Tribunal Supremo de Justicia, la manipulación de los reglamentos de la cámara legislativa, el avasallamiento de las instancias de fiscalización y la presencia de más de cien militares en altos cargos públicos, han creado así a una Venezuela en la que, en nombre de la soberanía popular, se ha ido reduciendo a su más mínima

expresión el juego de equilibrios y contrapesos que garantiza un control horizontal del poder y permite someter las decisiones del gobierno a un principio de legalidad. Si a esto le añadimos una honda purga del ejército tras el golpe de abril de 2002, un férreo dominio sobre el sector petrolero después de las huelgas de 2003, la formación y financiamiento de los famosos «Círculos Bolivarianos» a imagen y semejanza de los CDR castristas, y la descalificación sistemática de los opositores y agentes sociales (prensa, sindicatos, partidos, asociaciones) se entiende mejor por qué tantos y tantos venezolanos han venido denunciado en los últimos tiempos que el verdadero proyecto político de nuestro presidente es instalar una tiranía.

¿Cabía esperar otra cosa de un personaje con tan escasa tradición democrática como Hugo Chávez? Mi pregunta hoy parece retórica pero, en 1998, para un 56,2% de los votantes, por desgracia, no lo fue. Estoy seguro de que esa mayoría tampoco imaginaba que el país llegaría a los niveles de desgobierno de que hoy dan cuenta las cifras e índices económicos no ya de la oposición sino de los propios organismos del Estado y las instituciones internacionales. Da vértigo transcribirlos: para el año 2003, la contracción del PIB ha sido superior al 9% a pesar de un ligero repunte en el último trimestre, la tasa de paro oficial se sitúa alrededor del 20% y la inflación en torno al 25%. Desde 1998, la expansión del gasto público ha llevado la deuda interna de 2,3 billones de bolívares a 15,3 billones (cerca de 9.500 millones de dólares), la moneda se ha devaluado paralelamente en más de un 200%, 6.098 pequeñas y medianas empresas han desaparecido —más de la mitad del parque empresarial venezolano— y se calcula que un 58% de la población activa apenas sobrevive trabajando en el sector informal. En suma: Venezuela atraviesa actualmente por una de las peores recesiones de su historia. Serán necesarios por lo menos diez años, un crecimiento sostenido del 5% y un incremento de la población del 1,7% para que los venezolanos vuelvan a tener el nivel de ingresos de 1997. Y mientras tanto nuestro presidente subvenciona mercadillos y tómbolas en el centro de Caracas para redorar sus menguada popularidad y, entre viajes y discursos, juega al costoso juego de ser uno de los líderes mundiales del movimiento antiglobalización.

¿Cabía esperar otra cosa de un personaje tan irreflexivo como Hugo Chávez? Mi pregunta hoy parece retórica pero, en 1998, para un 56,2% de los votantes, por desgracia, no lo fue. Muchos de ellos, gentes de mil horizontes diversos —obreros y profesionales, técnicos y maestros, funcionarios y desempleados— llevan meses luchando para que se les reconozca el derecho a enmendar ese voto y a reescribir la historia de Venezuela lejos ya de las fantasías y quimeras del utopismo revolucionario. Por su parte, Hugo

Chávez, que sabe que su régimen pelagra, no ha escatimado esfuerzos para neutralizar esta reivindicación e impedir que se organice el referéndum revocatorio del mandato presidencial previsto por la actual Constitución. Eran necesarias 2.435.083 firmas para solicitarlo. Bajo la supervisión de la OEA y el Centro Carter, la oposición venezolana recogió cerca de 3.400.000 firmas y las depositó, en diciembre pasado, en las oficinas del Consejo Nacional Electoral. Chávez denunció entonces un «mega-fraude» que sólo los personeros del gobierno parecen haber visto. El pasado 29 de febrero, después de tres meses de espera –tres meses de conciliábulos, dilaciones y rumores– el Consejo Nacional Electoral, dominado por una mayoría de rectores chavistas, acabó rindiendo su veredicto: al final, resultó que sólo 1.832.493 firmas se consideraron válidas, ya que, por diversas y especiosas razones, 143.939 fueron eliminadas, 253.573 supuestamente contenían «errores», 878.017 presentaban una caligrafía de apariencia algo «similar» que se prestaba a «dudas» y unas 54.000 sencillamente se dieron por «extraviadas». Por supuesto, la reacción de la calle fue inmediata: las violentas manifestaciones que se produjeron en febrero y marzo traducen el profundo desencanto de una población que, con este timo de los rectores, ha visto burladas sus aspiraciones a una consulta democrática que debía sacar al país del atolladero en que se encuentra.

Once muertos, más de mil heridos y unas cuatrocientas detenciones es, por de pronto, el trágico balance de las luchas callejeras y los enfrentamientos entre la Guardia Nacional y los manifestantes. Un buen sector de la opinión internacional –e instituciones como la Fundación Sajarov y Human Rights Watch– ya ha hecho pública su condena a la brutal represión que se ha abatido sobre Venezuela y que ha provocado, entre otras reacciones, la dimisión de nuestro embajador ante la ONU, Milos Alcalay. Pero la presión interna y externa acaso ya esté dando sus primeros frutos: entre bastidores, los rectores del Consejo Nacional Electoral negocian actualmente con la oposición las condiciones de ratificación de 1.116.547 firmas que podría ser «reparadas» y cuya convalidación volvería a hacer posible un referéndum en Venezuela. La reciente sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo que declaró válidas las firmas cuestionadas, aunque ha sido suspendida por los magistrados de la Sala Constitucional, abunda en el mismo sentido. Si se llega finalmente a un acuerdo, habrá que velar para que el proceso referendario se realice de la manera más pacífica y civil, y para que esa hora de la verdad sea una hora estrictamente venezolana. La presencia en nuestro territorio de importantes brigadas de médicos y maestros cubanos enviados por Fidel Castro en el marco del plan de cooperación con Venezuela y el aumento incesante del número de funcionarios cubanos

que han ido llegando recientemente al aeropuerto de Maiquetía –11.530 sólo en el mes de octubre pasado, según fuentes de inteligencia citadas por el diario *El Universal* de Caracas– son motivos suficientes de inquietud. El dictador de La Habana, orgulloso mentor de Chávez, ya nos ha mostrado una y otra vez que no conoce límites cuando se trata de defender sus intereses vitales –y el suministro de petróleo venezolano a la isla es hoy uno de ellos. Pero no menos preocupantes son las informaciones convergentes de la prensa francesa, norteamericana y colombiana según las cuales las zonas fronterizas de los estados Táchira y Zulia, en el Occidente del país, se han convertido en área de despeje para las FARC y el ELN, con la secreta anuencia del gobierno venezolano. Huelga subrayar que, al igual que Fidel Castro, los guerrilleros colombianos saben defender sus intereses y no tienen ningún respeto por los votos de nadie.

En el caso de que fracasen las negociaciones en curso y se pierda toda esperanza de que se realice el referéndum, no cabe duda de que Venezuela habrá entrado entonces en un tiempo aciago en el cual los peores escenarios se hacen posibles, desde la declaración de un estado de excepción hasta la guerra civil, pasando por un nuevo y cruento golpe militar, una feroz represión de la oposición y la definitiva instauración de una dictadura a la manera castrista o fujimorista o acaso ya puramente chavista.

Hoy por hoy, nadie sabe a ciencia cierta lo que puede ocurrir. Pero, en cualquiera de las hipótesis evocadas, con o sin referéndum, lo único seguro es que los ojos del mundo representan uno de los escasos avales que nos van quedando para que se respeten los derechos humanos y las libertades democráticas en Venezuela. Por eso es vital que la comunidad internacional siga pendiente del proceso político venezolano y no aparte la mirada hasta tanto no se llegue a una solución consensual e institucional de la crisis por la que estamos atravesando. Y es que lo que está en juego no es sólo la estabilidad política y el futuro democrático de un país sino, como bien ha dicho Mario Vargas Llosa, los de una región y un continente.

Creo sinceramente que, en 1998, como en 2004, no se podía esperar otra cosa de un personaje tan conflictivo y atrabiliario como Hugo Chávez. Aquellos que aún se preguntan cómo un 56,2% de los votantes venezolanos pudo elegir a semejante presidente, habría que recordarles que muchos lo hicieron confiando en que la democracia venezolana, como cualquier democracia moderna, les garantizaba el derecho a equivocarse y a rectificar. Es ese derecho básico a revocar al mal gobernante a través del voto el que miles de ellos salieron valientemente a defender a las calles de Caracas y las principales ciudades de Venezuela ante las triquiñuelas de un régimen que está tratando de arrebatárselos.